



Señores

JUZGADO TREINTA Y SIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
E. S. D.

notificaciones.prejudiciales@mindefensa.gov.co

decun.notificaciones@policia.gov.co

notificaciones_judicialesalcaldia@pereira.gov.co

procesosordinarios@mindefensa.gov.co

notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co

Asunto: Pronunciamiento de excepciones

Demandantes: Armando Sánchez y otros

Demandadas: La Nación – Ministerio de Defensa, Municipio de Pereira y **Otros**

Jonathan Velásquez Sepúlveda, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.116.238.813 y portador de la tarjeta profesional No. 199.083 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de representante legal y profesional del derecho inscrito en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Legalgroup Especialistas en Derecho S.A.S., quien a su vez funge en calidad de apoderada judicial de los demandantes en el proceso de la referencia, a través del presente escrito procedo a **pronunciarme respecto de las excepciones** propuestas por el **Municipio de Pereira**

1. Cuestión previa: Oportunidad procesal

El parágrafo 2° del artículo 175 CPACA-, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021 establece con relación a las excepciones que:

“[...] De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas [...]”.

A su vez el artículo 201A del CPACA, adicionado por el artículo 51 de la Ley 2080 del 2021, establece:

“(...) Los traslados deberán hacerse de la misma forma en que se fijan los estados. Sin embargo, cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaría, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente. (...)”

De conformidad con lo anterior, es importante destacar que en el presente asunto el **Municipio de Pereira**, envió contestación de la demanda al correo electrónico de la persona jurídica apoderada de la parte demandante el 01 de octubre del 2024,



razón por la cual el traslado de las **excepciones** propuestas inicia el 02 de octubre y fenece el 04 de octubre del 2024, de lo que se concluye que el presente escrito es presentado oportunamente.

2. De las excepciones previas propuestas por el Municipio Pereira.

En la contestación de la demanda, el **Municipio de Pereira** propuso excepciones previas y de mérito, así:

- 2.1. Respecto al elemento de la **falla del servicio**: Imposibilidad jurídica de atribuir falla en el servicio en cabeza del municipio de Pereira.
- 2.2. **Inexistencia de una conducta por activa o pasiva** de la entidad territorial demandada (Municipio de Pereira) que haya tenido incidencia causal en el presunto daño antijurídico sufrido por los demandantes
- 2.3. Concausalidad de conductas por parte de la Policía Nacional, Ministerio de Defensa en la atribución del presunto daño antijurídico.
- 2.4. Juicio causal / ausencia de causa efectiva del daño atribuible al municipio de Pereira.
- 2.5. Falta de acreditación de existencia y criterios de liquidación del perjuicio inmaterial en su modalidad de perjuicios morales
- 2.6. Falta de acreditación del perjuicio inmaterial en su modalidad de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

3. De la excepción previa propuesta por el Municipio de Pereira

En virtud de lo anterior, es fundamental señalar que, conforme al parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA y al artículo 100 del Código General del Proceso, aplicable a los asuntos contencioso-administrativos por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, ninguna de las excepciones planteadas por la entidad tiene carácter de previa. Por lo tanto, estas deberán resolverse de fondo en la sentencia. No obstante, dada la relevancia de los argumentos de defensa expuestos por la entidad, procederé a pronunciarme en los siguientes términos:

- 3.1. Respecto al elemento de la **falla del servicio**: Imposibilidad jurídica de atribuir falla en el servicio en cabeza del municipio de Pereira.



Indica la entidad municipio de Pereira que “en el caso que nos ocupa, se puede determinar que no existe material probatorio que permita determinar la falla del servicio alegada por la parte demandante en cabeza del MUNICIPIO DE PEREIRA; por el contrario, existen serios elementos que claramente el MUNICIPIO DE PEREIRA se encontraba adelantando los procedimientos correspondientes para generar el cumplimiento de sus deberes legales”.

Contrariamente a lo afirmado por la entidad, es importante señalar que, en el caso bajo examen, se puede determinar que, aunque el Municipio de Pereira, como autoridad policial, tenía la potestad de llevar a cabo acciones contra el microtráfico de estupefacientes en el marco de las políticas de Seguridad y Convivencia Ciudadana, esta entidad incurrió en una falta al no proporcionar información veraz e imparcial. No cumplió con el deber de diligencia razonable para verificar la veracidad de la información reportada, dado que la vivienda de la señora Teresa Sánchez Jaramillo (q.e.p.d.) no fue demolida como parte del “PLAN 1.000 ACTIVIDADES CONTRA EL MICROTRÁFICO”, sino debido a una actuación administrativa por amenaza de ruina. Así, se puede afirmar que se indujo a la comunidad a creer que en dicho inmueble se llevaban a cabo actividades ilícitas, como la venta de estupefacientes. Esta información, además de ser falsa, tuvo un impacto negativo considerable en la población y fue divulgada de manera que presentaba el inmueble como un centro de distribución y consumo de drogas, lo que puso en entredicho la honorabilidad y el buen nombre de sus propietarios.

El artículo 21 C.P. dispone la garantía del derecho a la honra y delega en la ley la forma en que el mismo sea protegido. Usualmente, este derecho tiene una conexión material, en razón de su interdependencia, con la garantía prevista en el inciso primero del artículo 15 C.P., precepto que estipula el derecho de todas las personas a su intimidad personal y familiar, y a su buen nombre, imponiéndose al Estado el deber correlativo de respetar y hacer respetar estos derechos.

A estas previsiones debe agregarse lo previsto en el artículo 2º C.P., cuyo inciso segundo replica la previsión propia del constitucionalismo liberal clásico, la cual determina que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, creencias y demás derechos y libertades.

Una fórmula análoga de la garantía constitucional en comento está consignada en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma integrante del bloque de constitucionalidad, cuando establece que (i) toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad; (ii) nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación; y (iii) toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. De manera similar el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, previsión que también tiene naturaleza constitucional, dispone que (i) nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques



illegales a su honra y reputación; (ii) toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

De conformidad con estas previsiones constitucionales y del derecho internacional, se encuentra que el derecho a la honra está vinculado con la protección de la intimidad y la dignidad. Su contenido se define, entonces, en la protección de la imagen del individuo, la cual debe corresponder a la que se deriva de sus propios actos, así como de la salvaguarda de aquella información que, al pertenecer al fuero íntimo de las personas, no está llamada a ser comunicada a terceros, sin con ello inferir una grave e injustificada intervención en la autonomía y dignidad del sujeto concernido. Como se observa, las normas internacionales insisten en el deber estatal de salvaguardar al individuo de injerencias indebidas en su vida privada o en ataques a su honra, comprendida como la relación de correspondencia antes mencionada.

Existen, en ese orden de ideas, dos vertientes principales de protección del derecho a la honra: de un lado, la protección de la propia imagen, la cual debe cumplir con una condición de veracidad entre la información que se predica del sujeto y sus reales condiciones, cualidades y comportamientos. De otro lado, se protege aquella información que, al margen de su veracidad, refiere a datos personales íntimos, los cuales no están llamados a ser conocidos por terceros. Por ende, el objeto jurídico protegido en este caso es la intromisión injustificada, bien sea de particulares o del mismo Estado, respecto de dicha información personal excluida de circulación.

A la luz de lo expuesto, en el caso que ahora se presenta, queda claro que el Municipio de Pereira, Risaralda, incurrió en una falla al validar la información falsa divulgada en la rueda de prensa realizada conjuntamente con la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa. Esta actuación omisiva propició la generación del daño antijurídico alegado. Según la normatividad vigente, al ejercer sus competencias y responsabilidades, el Municipio, encabezado por su Alcalde, debió investigar la realidad en torno a la demolición de la vivienda en lugar de adoptar una actitud pasiva, guardando silencio y mostrando permisividad, como efectivamente ocurrió.

Es importante señalar que fue únicamente cuando la verdad de los hechos salió a la luz a través de los medios de comunicación, que el entonces Alcalde de Pereira ofreció disculpas y solicitó la remoción del comandante de la Policía Metropolitana de Pereira. Sin embargo, este acto llegó cuando el daño ya se había consumado, lo que evidencia una omisión en el cumplimiento de sus funciones. Las disculpas del Alcalde, lejos de remediar la situación, solo convalidan la falta cometida.

En consecuencia, la excepción planteada por la entidad no tiene fundamento suficiente para prosperar. La falta de veracidad en la información divulgada y la omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte de la administración evidencian que no se cumplen los requisitos necesarios para que dicha excepción sea considerada válida. Por lo tanto, se solicita al Honorable Juez desestime su relevancia en el presente caso, dado que los argumentos presentados no logran



desvirtuar los hechos ni mitigar la responsabilidad que le corresponde a la entidad en esta situación.

3.2. Inexistencia de una conducta por activa o pasiva de la entidad territorial demandada (Municipio de Pereira) que haya tenido incidencia causal en el presunto daño antijurídico sufrido por los demandantes.

Indica la entidad municipio de Pereira que “los argumentos expuestos por la parte demandante carecen de fundamento fáctico o jurídico: No se encuentra demostrado que la actuación del MUNICIPIO DE PEREIRA fuese determinante para la materialización del daño, dado que, no se encuentra probada la intervención del Alcalde de la ciudad y en segundo lugar, y así se encontrara probado, él mismo actúo teniendo en cuenta la **legítima confianza en virtud del trabajo o funciones asignadas al MINISTERIO DE DEFENSA y la POLICÍA NACIONAL.** Es importante aclarar y resaltar que la orden de demolición no la dio el Alcalde; la dio la inspección 15 de policía, la misma que no se pudo ejecutar porque una Entidad administrativa diferente ordenó y finalmente ejecutó la orden”.

Contrario a lo esgrimido por la entidad demandada, es importante destacar que la actuación del Municipio de Pereira es determinante para la materialización del daño, dado que la información falsa divulgada por la administración, en conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, creó un contexto que llevó a la estigmatización del inmueble. Aunque la orden de demolición fue emitida por la Inspección 15 de Policía, esto no exime al Alcalde de su responsabilidad, ya que, al convalidar la información errónea, facilitó la percepción pública de que el inmueble estaba vinculado a actividades ilícitas.

Es fundamental destacar que, en la fecha de los hechos, existía una orden de demolición por amenaza de ruina emitida por la Inspección 15 de Policía de Pereira, que debía ser ejecutada con el apoyo de las entidades pertinentes. No obstante, el Municipio de Pereira, en colaboración con la Policía Nacional, optó por presentar el inmueble como un sitio de expendio y consumo de sustancias estupefacientes, motivados únicamente por la necesidad de mostrar resultados positivos ante la comunidad y el gobierno nacional.

La intervención del entonces Alcalde, Carlos Alberto Maya López, es evidente. Su asistencia, junto al Ministro de Defensa y altos mandos de la Policía Nacional, a la rueda de prensa del 18 de marzo de 2022, fue de dominio público. En esta ocasión, se difundió información falsa sobre el inmueble y se agradeció al Ministro por el supuesto éxito de la demolición en relación con un mito de inseguridad. Así, el Alcalde se convirtió en partícipe del montaje articulado por otras entidades, que estigmatizó el inmueble como un centro de expendio y consumo de estupefacientes.

En relación con el argumento de defensa de confianza legítima, es importante señalar que este no puede ser invocado como justificación para una actuación que conlleva consecuencias graves sin la debida diligencia en la verificación de los hechos. La administración municipal tenía la responsabilidad de actuar con rigor, asegurándose de que la información que respaldaba la demolición era correcta y no perjudicial para los ciudadanos. La responsabilidad administrativa y el deber de cuidado no se transfieren simplemente por confiar en las acciones de otras



entidades, especialmente cuando estas tienen un impacto directo en los derechos y la reputación de las personas afectadas. Por lo tanto, el argumento de la falta de intervención del Alcalde carece de fundamento ante la responsabilidad que recae sobre la administración local por la difusión de información errónea y la omisión de un control adecuado. En consecuencia, esta excepción no está llamada a prosperar.

Respecto de los demás medios exceptivos propuestos debe advertirse que, dado que los mismos no se dirigen a atacar las pretensiones de la demanda mediante la formulación de hechos nuevos que por sí solos tengan la virtud de destruir, aplazar o modificar los efectos de aquellas, el análisis de fondo del asunto planteado deberá resolverse en la sentencia que su honorable despacho emita.

Sobre este punto, la doctrina ha expuesto que:

"[...] Excepciones de fondo y su declaración oficiosa. El código administrativo se refiere solamente a las excepciones que se oponen a la prosperidad de la pretensión (artículo 164, inciso segundo), o sea aquellas que implican una defensa de fondo, por medio de la cual el demandado ya no se limita a contradecir o negar los hechos constitutivos del derecho o al simple rechazo de la pretensión, sino a afirmar la existencia de un hecho extintivo, modificativo o impeditivo que tenga como consecuencia que la relación jurídica no produzca efecto legal. En sentido más estricto se puede afirmar que el fenómeno exceptivo viene a implicar un hecho que por sí mismo tienen el poder jurídico de enervar la pretensión del demandante [...]".¹ (subrayado fuera del texto original)

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Consejo de Estado², al diferenciar las razones de defensa de las excepciones de fondo, así:

"[...] Para resolver este punto, la Sala recuerda que los argumentos con los cuales en un proceso judicial se pretenda impedir el surgimiento de las pretensiones de la demanda se consideran genéricamente excepciones. Pero la proposición de éstas no puede basarse simplemente en defender la legalidad del acto acusado, como erróneamente lo presenta el apoderado del señor García García.

Además, la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que son diferentes las razones de defensa que las excepciones de fondo, pues las primeras versan sobre los hechos y el derecho que se alega por la parte demandante, mientras que las segundas atienden a situaciones extintivas del derecho o que impiden el ascenso de las pretensiones.

Las excepciones deben versar sobre hechos extintivos o impeditivos de la pretensión; no pueden confundirse con los argumentos encaminados a desvirtuar los hechos y/o los fundamentos de derecho en que sustenta el demandante sus peticiones, que constituyen el ejercicio global de la defensa; así se deduce del artículo 144 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 46 de la Ley 446 de 1998, que

¹ Betancur Jaramillo, Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Sexta edición 2.002. pág. 325

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 8 de julio de 2010, radicación 11001-03-28-000-2010-00001-00, consejera ponente: Susana Buitrago Valencia.



distingue entre las razones de la defensa (num.2) y la proposición de las excepciones (num.3)³

Así, en el caso sub- examine no encuentra la Sala que las excepciones propuestas ostenten en realidad esta entidad, toda vez que los argumentos que las estructuran no ponen de presente hechos o razones, que impidan el surgimiento de las pretensiones de la demanda.

En efecto, lo que la parte demandada propone son argumentos de defensa encaminados a desvirtuar la ilegalidad del Decreto 4736 de 2009, los cuales, de ser el caso, serán resueltos al analizar de fondo el presente asunto [...]"
(Negrilla y subraya fuera de texto).

Así las cosas, este mandatario judicial no hará alusión a las demás excepciones incoadas en la contestación de la demanda, para que las mismas sean resueltas de fondo en sentencia.

Atentamente,

JONATHAN VELÁSQUEZ SEPÚLVEDA

Representante legal de Legalgroup Especialistas en Derecho S.A.S.

Cédula de ciudadanía 1.116.238.813

Tarjeta profesional 199.083 del Consejo Superior de la Judicatura

Forma 1996
Revisó JRM/GG

³ Sentencia del 9 de marzo de 2006. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo., Sección Quinta. Consejero ponente Dr. Filemón Jiménez Ochoa. Rad. No. 11001-03-28-000-2004-00008-01(3216) Actor: Orlando Arciniegas Lagos.